

La Unión Europea en la encrucijada

G. Buster

1- Introducción

La campaña de la Administración Bush para crear las condiciones políticas que hagan posible su guerra contra Iraq ha sacado a la luz toda una serie de contradicciones entre la “vieja Europa” del eje franco-alemán y la “nueva Europa” del eje Blair-Aznar-Berlusconi, que ha arrastrado tras de si a los nuevos estados miembros de Europa Central antes mismo de la ampliación. En el momento de prueba culminante de redefinición del sistema político internacional, la UE se encuentra dividida, incapaz de definir una política exterior y de seguridad común. Y estas diferencias en política exterior representan una sola fractura de las múltiples que se cruzan e interponen en el proyecto de construcción europeo, que ha sido y es el proyecto estratégico sobre el que asientan su hegemonía las clases dominantes europeas.

La UE acumula inmensas contradicciones internas: falta de legitimidad democrática; no definición de un proyecto claro de reforma institucional para la futura gobernanza de la UE; rivalidades internas nacionales, tanto económicas como políticas; dependencia y grados de autonomía distintos en relación con EE UU; márgenes de actuación diferentes frente a la recesión y sus consecuencias sociales; dificultades de asimilación en el mercado único, manteniendo una pretensión de “modelo social europeo”, de los candidatos de Europa Central, sometidos en los próximos cinco años a una durísima reestructuración económica y social; control de sus fronteras exteriores y de los crecientes flujos migratorios.

Es decir, la Europa del Euro, la Europa-potencia, la Europa-fortaleza, la Europa-espacio de la ampliación y el futuro de Europa son terrenos de conflicto, debate y decisión política.

Sin un liderazgo claro en la UE, que hoy no existe, estas contradicciones pueden desembocar en una crisis grave del proyecto europeísta. En los próximos tres años el calendario no puede ser más apretado:

-2003: Posicionamiento ante la guerra de Iraq. Propuesta de la Convención de Constitución Europea. Redefinición del Pacto de Estabilidad; primera operación militar de la UE en Macedonia.

-2004: Referendum de adhesión en Europa Central, Conferencia Intergubernamental sobre el futuro de Europa, elecciones al Parlamento Europeo;

-2005: Debates sobre la reforma de la Política Agraria Común. Adopción de la Constitución Europea, referendum(¿?);

-2006: Discusión y adopción del nuevo presupuesto de la UE ampliada.

La izquierda anticapitalista y alternativa debe prepararse conscientemente, desarrollando los movimientos sociales en una perspectiva europea, así como un programa de resistencia y elementos alternativos para una Europa distinta y posible de los trabajadores y los pueblos. Ello exige un esfuerzo consciente y coordinado en el movimiento “antiglobalización”, en el sindical y en la esfera de la representación política. Los primeros pasos se están dando, con las diferencias y desigualdades inevitables, en el Foro Social Europeo y las Conferencias Anticapitalistas Europeas.

2- Un poco de historia: la naturaleza de clase de la UE

Las Comunidades Europeas, el antecedente de la actual UE, surgió en el marco de la Guerra Fría y de la división de Europa acordada por los vencedores de la II Guerra Mundial en Yalta y Postdam. El proyecto “europeísta” de los llamados Padres Fundadores buscaba

una reconstrucción de la hegemonía de clase de las burguesías europeas, fuertemente cuestionada por la guerra y la experiencia de la resistencia popular contra el fascismo. La reconstrucción de los estados europeos occidentales, bajo la hegemonía política y económica de EE UU, necesitaba una nueva legitimidad a partir del ansia de paz y cooperación a nivel popular para superar los efectos de la guerra, un nuevo “europeísmo” basado en la cooperación entre las burguesías europeas y un pacto social con las direcciones reformistas políticas y sindicales de la clase obrera. Así nació el llamado “modelo social europeo” y se abrió un nuevo ciclo de acumulación capitalista en Europa occidental.

Desde su origen, la naturaleza de clase del proyecto político “europeísta” ha marcado el desarrollo de las instituciones de la Unión Europea. No se trata de instrumento político neutral, sino de un aparato supra-nacional capaz de:

- articular e imponer políticas de clase en una jerarquía de intereses impuesta por el mercado,
- con una burocracia independiente frente a los sistemas representativos democrático-liberales pero fuertemente ligada a las grandes multinacionales europeas y
- con un equilibrio de poderes entre los estados miembros que facilita la articulación a través de la Comisión de los intereses de las clases dominantes europeas sin las limitaciones que imponen las correlaciones de fuerzas con la clase obrera en cada uno de los estados miembros.

La construcción de la Unión Europea ha sido un proceso histórico lleno de avatares, de avances y retrocesos, de períodos de estancamiento. Pero es el único proyecto viable a comienzos del siglo XXI de unas clases europeas dominantes cada vez más homogéneas e interrelacionadas para imponer en Europa la reestructuración neoliberal, aumentar su tasa de beneficios, competir económicamente en el mercado mundial con EE UU y

Japón y poder jugar el papel de socio con capacidad de influencia en un orden mundial hegemonizado por EE UU.

3- La UE instrumento del neoliberalismo: Maastricht

El derrumbe del llamado “Bloque Socialista” en 1989 situó a las clases dominantes europeas ante el desafío de la nueva situación internacional y como integrar en su zona de influencia los potenciales mercados de Europa Central, ocupados por el ejército soviético tras la II Guerra Mundial. Contaba ya con la experiencia de más de una década de cooperación económica, especialmente el capital alemán, con las reformas económicas del llamado “socialismo de mercado” iniciadas en Polonia y Hungría.

Bajo el impulso de la Comisión Delors, las Comunidades Europeas se convirtieron en la base instrumental para hacer frente a este desafío, al mismo tiempo que a una reestructuración general de las economías de Europa Occidental que les permitiese recuperar la tasa de beneficios tras la crisis de 1972-74. Neoliberalismo y Ampliación acabaron siendo las dos caras de una nueva moneda, el Euro.

El Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea era un proyecto político global que partía de establecer el imperio de un mercado único sobre el que asentar la integración de las economías de Europa Central y ser la base de una Europa-potencia diplomática y militar como sujeto común del nuevo orden internacional. Los estados miembros, sin embargo, seguían siendo el marco de gestión de los conflictos sociales, evitando su generalización a un marco europeo que podía favorecer la solidaridad de la clase obrera y su resistencia en el marco privilegiado para la nueva fase de acumulación del capital europeo.

La disciplina del mercado único se impuso a través de las políticas

de austeridad y convergencia primero y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento después para la introducción de la moneda única, el Euro. Todo ello en un déficit democrático casi completo, con un Parlamento Europeo con muy escasas competencias sobre un presupuesto predeterminado por el Consejo Europeo y con una Comisión designada por acuerdos intergubernamentales y con una capacidad de iniciativa progresivamente decreciente, hasta convertirse en un mero órgano de gestión de las decisiones de los Consejos Europeos, bajo la presión continua de los lobbies de las multinacionales europeas. El caso extremo de este déficit democrático es el estatuto de autonomía del Banco Central Europeo.

Si Maastricht transformó el proyecto “europeista” en un instrumento neoliberal, desplazó al mismo tiempo el llamado “método comunitario” de la gestión de las instituciones europeas, reemplazándolo progresivamente por el “método de directorio” en el que las jerarquías de intereses impuestas por el mercado único se manifiesta políticamente a través de los intereses hegemónicos de los estados-miembros “grandes”: Francia, Alemania y Reino Unido, a través del Consejo Europeo.

4- La Europa del Euro y el “modelo social europeo”

La entrada en circulación del euro, en enero del 2002 ha estado acompañada de un duro debate sobre el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con su corsé sobre los presupuestos, el Pacto busca mantener la fortaleza de la moneda única frente a lo que llaman “presiones corporativas”, es decir presiones redistributivas de la clase obrera por aumentar el gasto social. El pacto tiene una segunda válvula de seguridad que es la gestión autónoma por el Banco central Europeo de las tasas de interés del euro. Impuesto en un principio por Alemania, el Pacto se ha convertido tras la recesión 2000-2001 en un auténtico obstáculo

para cualquier medida de relanzamiento de la demanda para sostener el crecimiento económico en la UE. Cuando Francia, Alemania, Portugal e Italia se aproximaron, en año electoral, al déficit presupuestario máximo permitido del 3% del PIB y el Comisario Solbes primero amonestó en público y después amenazó con sancionar a esta lista de países, que forman el corazón de la economía de la EU, la conveniencia de hacer una lectura “flexible” del Pacto se convirtió en una reivindicación de muchos gobiernos europeos.

Esta crítica del Pacto, y de las políticas de austeridad que implica, chocó durante el año 2003 con su defensa ortodoxa de la Presidencia española y el Comisario Solbes. El Banco Central Europeo mantuvo su política de tipos de interés alto, a pesar de las continuas bajadas de la reserva Federal de los tipos de interés del dólar, y la consecuencia fue una importante pérdida de competitividad de las exportaciones de la UE en el mercado mundial, que aceleró la recesión en Europa. En estos momentos, a mediados del 2003, la interpretación del Pacto sigue siendo el tema central de discusión de cada reunión de los ministros de finanzas y economía, el ECOFIN. Frente a los que, apoyados en el FMI, señalan el carácter anti-cíclico del Pacto, otro sector sigue apoyándolo como un freno frente a las movilizaciones crecientes de la clase obrera, las huelgas de la construcción y el metal en Alemania, las huelgas generales en Italia y España. Curiosamente, el nuevo tema de debate es si la Comisión debe aceptar la participación en la guerra de Iraq, los gastos derivados de ella, como una “excepción” a la norma, como en su caso concedió a las ayudas contra las inundaciones en Alemania.

Este debate se cruza asimismo con el de cual es el modelo social más eficaz, el de la economía de EE UU o el de los países más ricos de la UE para recuperar competitividad, recuperar tasas de crecimiento y salir de la recesión. Un debate entre los defensores de la “modernización” de la economía de la UE reimpulsando el

llamado *Espíritu de Lisboa* y los defensores del “modelo social europeo”.

Una de las bases de la legitimidad popular de la UE es la idea de que existe un “modelo social europeo” basado en el pacto social con los grandes sindicatos, que permite una mayor redistribución de la renta que en EE UU o Japón, con mayores niveles de gasto social y seguridad social. El origen del mito es un hecho histórico real: la correlación de fuerzas tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial que obligó a una política de cooptación social a la burguesía y una segunda oleada similar tras Mayo del 68. Los partidos socialdemócratas son los principales beneficiarios de esta ideología, que tiene su círculo de defensores más estrictos en la cúpula de la Confederación de Sindicatos Europeos (CES).

La estrategia de este “europeísmo sindical” de la CES era comunitarizar la legislación social como mecanismo de elevar el mínimo común denominador. Pero los estados miembros siempre se han negado y hasta hoy la gestión de los temas sociales siguen siendo de la estricta competencia nacional, mientras que su financiación está condicionada por las decisiones comunitarias. Los derechos sociales y de los trabajadores no han sido recogidos ni en la Carta de Derechos Fundamentales ni en los proyectos de Constitución de la Convención. Pero en nombre de esta estrategia de co-gestión, la CES ha aceptado todos los pactos sociales necesarios para el ajuste y la entrada en circulación del euro, justificando los sacrificios de hoy en nombre de las ventajas futuras de la construcción europea que nunca llegaron. Hasta que la situación ha empezado a hacerse cada vez más insostenible y ha tenido que empezar a movilizar contra la nueva ola de privatizaciones, reformas del mercado laboral y ajustes presupuestarios inspirados estos dos últimos años en el *Espíritu de Lisboa* para la “modernización” del 2000 y la llamada *Estrategia de Luxemburgo* para la reforma de los mercados laborales. Esta es la explicación en buena parte de las manifestaciones sindicales en

Niza, Bruselas, Barcelona y Sevilla.

Se trata de un terreno esencial de confrontación social y sindical, que aun esta por decidir. El Consejo Europeo de Barcelona intentó lanzar una segunda ofensiva del *Espíritu de Lisboa*, pero fue frenado por las huelgas generales en Italia y España y otras acciones sindicales en toda la UE. Pero dejó una bomba de acción retardada a través de los 28 informes que encargó a la Comisión para ir adoptando decisiones en los próximos cinco años. Es necesario en este terreno dar la batalla de las ideas por un lado por una Europa de los Trabajadores y por otro coordinar las luchas sindicales de resistencia a escala europea, combinadolas con las luchas de los precarios como en las Euromarchas.

5- La Ampliación y la “Europa-espacio”

El Consejo Europeo de Copenhague a finales del 2002 concluyó las negociaciones para la incorporación a la UE en la primavera del 2004 de diez nuevos estados miembros. Además de Malta y Chipre, ocho de ellos son antiguas “democracias populares” de Europa Central (PECOS). Se cerrará así el período de transición hacia el capitalismo, iniciado en estos países desde 1989, con las llamadas “terapias de choque”. El precio social y económico de las políticas neoliberales en Europa Central ha sido tragico. La caída del PIB ha llegado en algunos casos al 25% y no se ha recuperado para el conjunto de los PECOS hasta el 2001. La tasa de paro se ha situado entre el 10% y el 17%. La diferencia del nivel de vida para el conjunto de la población no solo no ha disminuido desde 1989, sino que ha aumentado: su renta media solo es el 38% de la de la UE-15.

Los Acuerdos Europeos han sido el mecanismo de presión continua para la apertura de los mercados, las privatizaciones y la reestructuración. El superavit comercial de la UE con los PECOS es de 17.000 millones de euros. A pesar de la fuerte resistencia

sindical en países como Polonia, Rumania, Hungría, la falta de una alternativa política no ha conseguido frenar el proceso de reestructuración neoliberal, del que se han beneficiado especialmente las antiguas nomenklaturas, base de la nueva burguesía centro europea, y las grandes empresas multinacionales de la UE. Los nuevos partidos social-demócratas, nacidos de los antiguos partidos comunistas, han sido en muchos casos los principales instrumentos de este proceso de alineamiento con las políticas neoliberales de la UE.

La ampliación sumará 75 millones de personas a los 375 millones de ciudadanos de la UE, un 23% más, pero solo añadirá al PNB de la UE un 4,5%. Si se compara con la ampliación a España, Portugal y Grecia, las cifras para ambos conceptos fueron del 22% y del 10% del PNB. La diferencia de nivel de rentas es enorme. El PNB per capita de los tres candidatos mediterráneos en 1980 era el 66% de la media comunitaria, pero el de los PECOs es solo el 38%, lo que tendrá como efecto la reducción del PNB per capita de la UE-25 en un -15%. De acuerdo con las actuales reglas ello implicaría importantes transferencias. Mientras que la población de Polonia supone el 10% de la de la UE, su PNB es solo el 2%. España en 1980 suponía el 14% y el 8% respectivamente.

En los PECOS la proporción de la población activa en el sector agrícola es el 17% y la contribución al PNB el 8% (cifras muy similares a las de España, Portugal y Grecia en su momento), frente a la media de la UE de 4% y 1,5% del PNB. Pero la situación de Polonia es especial. Las cifras polacas son de un 21% de la población activa en el campo y un 4% del PNB. Más del 80% de la tierra está distribuida en pequeñas explotaciones familiares de muy baja productividad. En los nuevos miembros de Europa Central se ha producido una disminución del empleo rural desde 1994 de -4%. Polonia ha perdido ya 600.000 empleos rurales en este período. La Comisión prevee reducciones anuales del empleo rural superiores al 1% en los PECOS y de un 2% en el sector

público. Para Polonia, con su estructura rural específica, supone desarraigar a más de un millón de personas del campo en los próximos cinco años, en el mismo momento en el que la reforma del sector público y la reestructuración industrial pondrán en la calle a otras 250.000 personas. Es difícil imaginar las consecuencias sociales de todo ello después de que en los últimos diez años el consumo real haya disminuido en el campo un 50%, con tasas de pobreza del 29,9% frente a la media nacional del 16,5%. La única válvula de seguridad prevista es la emigración de 900.000 personas hacia Europa Occidental. La inestabilidad política es ya una realidad con la ruptura del Gobierno de coalición socialdemócrata-campesino y el fortalecimiento de la oposición populista más anti-EU.

¿Podrán las ayudas de la UE compensar a los nuevos estados miembros? Los acuerdos financieros acordados en Copenhague han abaratado el precio inicial previsto para la Ampliación, han reducido las ayudas agrícolas directas al 35% y han establecido unos techos del 75% de toda la ayuda a recibir alegando incapacidad de gestión de los nuevos miembros. Las ayudas de la UE no solo no pueden paliar esta situación, sino que están diseñadas para acelerar el proceso de reestructuración, creando una fuerte discriminación hasta el 2006 entre ciudadanos europeos occidentales de primera y ciudadanos europeos centrales de segunda. Una diferenciación que se expresa en una construcción europea de dos velocidades: la de las “cooperaciones reforzadas” del centro de la UE que constituye la “Europa-potencia” y las zonas periféricas de la “Europa-espacio”.

Pero la ampliación es utilizada al mismo tiempo para acelerar el proceso de reestructuración en la UE-15, porque las actuales políticas redistributivas y de subvenciones, las ayudas estructurales y la política agraria común, simplemente no son mantenibles en los actuales límites presupuestarios. Ya hay toda una campaña en marcha para reducir drásticamente estas políticas

en sus aspectos redistributivos en las negociaciones para el nuevo prepuesto en el 2006.

6-La Europa-fortaleza

Más de 13 millones de trabajadores inmigrantes legales viven en la UE. Representan el 3,5% de la población y cerca del 11% de la clase obrera europea. Son el resultado de la demanda de fuerza de trabajo barata de cada ciclo de crecimiento económico capitalista, buscada por la patronal europea en sus antiguas colonias con programas de reclutamiento. Hoy viven en los barrios marginales de la UE, sin derechos cívicos en muchos casos y con un acceso muy limitado a los servicios públicos.

Además, cerca de 500.000 personas entran cada año ilegalmente en la UE, huyendo de la miseria, la guerra y los desequilibrios generados por la globalización neoliberal en el resto del Planeta. Alimentan un mercado negro de trabajo sometido al imperio más completo del libre cambio: sin derechos laborales ni cívicos, precario y flexible. Desde 1974 solo 1,8 millones de peticiones de regulación han sido aceptadas en la UE. Casi un tercio de estos trabajadores ilegales son solicitantes de asilo y refugio a los que se abandona en un limbo burocrático sin concederles ayudas o permiso de trabajo.

La razón económica que alienta esta inmigración es evidente: para mantener un saldo demográfico positivo, la UE necesita no solo revertir su tasa de natalidad decreciente de 1,4 niños por mujer hasta 1,8 (el neoliberalismo tiene los mismos efectos demográficos que las guerras) sino además importar 1,5 millones de personas todos los años. Esta cifra, sin embargo, es inferior a la inmigración relativa anual a EE UU y Canadá.

Si en sus inicios históricos el capitalismo fue adicto a la esclavitud, hoy el neoliberalismo lo es al trabajo inmigrante y en especial al

trabajo inmigrante ilegal. Su razón social es dividir a la clase obrera e imponer al sector más atomizado e indefenso un régimen de explotación que ejerce una presión constante reductora no solo de los salarios sino también de los derechos laborales y cívicos del conjunto de los trabajadores. Sin papeles y sin derechos, se exige a los inmigrantes que se integren en una cultura que les niega el derecho de ciudadanos, condena sus costumbres como primitivas y los criminaliza con criterios racistas.

Nada demuestra mejor la verdadera naturaleza de la gobernanza neoliberal en la UE que el estatuto de no-ciudadanos que confiere a estos trabajadores y la regulación que pretende de la demanda de su fuerza de trabajo. El Consejo Europeo de Tampere en 1999 inició la comunitarización de estas políticas reduciendo el derecho de asilo y refugio. El Consejo Europeo de Sevilla limitó el derecho de reagrupación familiar y de asentamiento, creó el marco legal para una sub-clase de trabajadores sin derechos como residentes de larga duración, y combinó nuevas políticas de reclutamiento en terceros países con una nueva ola de represión y expulsiones contra los trabajadores ilegales. Todo ello en nombre de la lucha política contra la xenofobia y el ascenso de la extrema derecha, a la que se intenta robar electorado aplicando “racionalmente” sus programas.

Un elemento de esta nueva política comunitaria es la propuesta de gestión común de las fronteras exteriores de la UE, convertidas en la primera línea de batalla contra las víctimas de la globalización capitalista. El cuerpo de guarda-fronteras que se quiere crear en la UE será la guardia pretoriana de la Europa fortaleza.

La lucha de los “sin papeles”, la solidaridad con las reivindicaciones de los trabajadores inmigrantes han sido uno de los elementos centrales para la reconstrucción moral y política de una izquierda anticapitalista y alternativa. En la primera línea de la lucha contra la explotación neoliberal, en la barricada más dura,

han estado las comunidades negra y asiática del Reino Unido, la turca y kurda en Alemania, la maghrebi en Francia y Bélgica, subsaharianos, latino-americanos y marroquis en el Estado español. Nuestro objetivo es aprender de estas luchas, impulsar su auto-organización y sindicalización, restablecer la unidad de la clase obrera exigiendo derechos laborales y cívicos plenos para todos.

7-La Europa-potencia

La consolidación del Euro requiere una estructura política eficaz capaz de gobernar los intereses del gran capital europeo, pero también la capacidad de desplegar una acción diplomática y fuerza militar para defender esos intereses en el marco de la globalización, aunque sea en un marco autónomo bajo la hegemonía de EE UU. La UE ha hecho en los últimos meses un esfuerzo enorme para dotarse de una fuerza de intervención rápida de 60.000 hombres, de un estado mayor propio y de los medios para su despliegue. La primera operación bajo el mando del estado mayor europeo ya está en marcha, en Macedonia.

El impulso de la política exterior y de seguridad común nace directamente de la experiencia de intervención en los Balcanes y de la incapacidad para estructurar una intervención autónoma de los intereses de las oligarquías europeas frente a EE UU y Rusia. La designación de un Alto Representante para la política exterior en Solana, primero, y la declaración de operatividad de la fuerza de intervención rápida de la UE -aunque se limite por el momento a las operaciones de policía- han sido pasos decisivos en este sentido. Pero el objetivo fijado está aun muy lejos, como se ha puesto de manifiesto en los Balcanes, el Oriente Medio, en África o en Afganistán, para no hablar de la división entre la “vieja” y la “nueva” Europa en la crisis de Iraq.

Pero la creciente inutilidad de la OTAN y la necesidad de contar

con esa capacidad de intervención imperialista aceleraran el desarrollo de la PESC y de la fuerza de intervención rápida europea, aunque tenga que resolver numerosas contradicciones con EE UU, cuya hegemonía no pone en cuestión.

Si el “déficit democrático” es grande en el funcionamiento de las instituciones europeas, en lo relativo a la acción exterior de la UE, diplomática o militar, es simplemente escandaloso. ¿Ante quién responde el Consejo Europeo en sus decisiones en este campo?. La respuesta es ante nadie directamente. La diplomacia y la fuerza de intervención rápida de la UE son instrumentos directos de la intervención imperialista de la UE en el marco de la globalización y del nuevo orden mundial hegemonizado por EE UU. Es posible que el eje franco-alemán consiga evitar una segunda resolución sobre Iraq en el Consejo de seguridad, pero cualquier movilización de la fuerza de despliegue rápida europea necesita contar con el apoyo logístico de EE UU.

Lo mismo puede decirse de la gestión colectiva de sus intereses neocoloniales heredados de las grandes potencias europeas a través de los Acuerdos de Cotonou con los países ACP. La política de ayuda al desarrollo de la UE, primer donante mundial, es un elemento central de las políticas de ajuste estructural en Africa, de reestructuración de las economías del Tercer Mundo para su integración en el mercado neoliberal a pesar del coste social que ello representa, y de corrupción a través del monopolio de las grandes empresas europeas, que son las principales beneficiarias de los fondos de ayuda al desarrollo de la UE. Es necesaria una política de ayuda al desarrollo totalmente diferente, que parta de los intereses y de la apropiación de los programas de desarrollo por parte de las poblaciones de los ACPs.

8-La gobernanza y el futuro de Europa

Conscientes de la erosión de la legitimidad del proyecto

“europeista” y del creciente “déficit democrático” de las instituciones europeas, el Consejo y la Comisión, como representantes de las oligarquias europeas, intentan responder a la vez a los problemas de gobernanza interna de las instituciones europeas tras la ampliación, la búsqueda de una legitimidad “democrática” renovada para su proyecto y la represión de cualquier alternativa social real a su proyecto neoliberal.

El debate sobre el futuro de la UE cumple los dos primeros objetivos y las medidas “antiterroristas” adoptadas tras el 11 de septiembre el tercero.

En un ejercicio de “democracia virtual”, una Convención designada por los actuales Gobiernos, Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo elaborará un proyecto de Constitución, simplificando los Tratados actuales, que deberá ser discutido y aprobado por la Conferencia Intergubernamental en el 2004. Tras los inicios de sus trabajos, se han multiplicado las propuestas sobre la constitución política de la Europa potencia. Sobre si debe evolucionar hacia una Federación o hacia una Confederación de estados, sobre el reparto de poder interno entre los estados miembros y las diferentes instituciones europeas. Hemos sido testigos de todo tipo de contradicciones, como la filtración el mismo día de dos proyectos totalmente distintos de Constitución por parte de la Comisión: uno ferealista (el llamado proyecto Penelope) y otro mas abierto al compromiso con los estados miembros del Consejo que quieren mantener sus prerrogativas y aumentarlas con la designación en su seno de un Presidente del Consejo que actuaría como primera autoridad de la UE frente a un Presidente de la Comisión elegido por el Parlamento Europeo.

Este ejercicio es profundamente anti-democrático y niega de partida la noción misma de ciudadanía europea como un ejercicio de auto-determinación. Por otra parte intenta consolidar una estructura jerárquica de poder asimétrica, con un núcleo central

dominado por un directorio de grandes potencias, la “Europa potencia” y una zona secundaria, sumida la regulación de la primera, pero sin capacidad de decisión real, la “Europa espacio”. Los primeros 16 artículos de la futura Constitución redactados por la Convención no dejan lugar a dudas del carácter de este ejercicio y suponen un recorte importante de los derechos de los trabajadores y de los pueblos europeos. Frente a esta farsa del reparto de un poder usurpado, reclamamos un auténtico proceso constituyente en el que de verdad tengan voz tanto los ciudadanos europeos como los pueblos en el que se pueda debatir la posibilidad de otra Europa solidaria y auténticamente democrática. En el momento en el que la Convención haga públicos sus trabajos en junio del 2003, la izquierda alternativa europea debe ser capaz de presentar una alternativa en el terreno de las ideas e iniciar una campaña en defensa de los derechos democráticos más elementales de los ciudadanos europeos.

Porque tras el 11 de septiembre, la legislación “antiterrorista” corre el peligro de convertirse en un estado de excepción permanente, extendiendo unas medidas previstas contra la eventual amenaza terrorista de Bin Laden también contra el movimiento por la justicia global y los sindicatos. Su verdadero objetivo es frenar las movilizaciones contra las reestructuraciones y las políticas neoliberales, las protestas contra las Cumbres europeas en nombre de otra Europa posible y el movimiento contra la guerra imperialista.

9- Construir una alternativa: las Conferencias Anticapitalistas Europeas

La huelga general de diciembre de 1995 de los sectores públicos en Francia abrió un nuevo ciclo de resistencia contra las políticas neoliberales en la UE. Sus efectos políticos pronto se hicieron sentir con la elección de gobiernos socialdemócratas y verdes en 12 de

los 15 estados-miembros, especialmente en Francia y Alemania.

Pero ese ciclo se ha agotado en sus propias contradicciones. Es cierto que la resistencia sindical se ha mantenido e incluso acrecentado, pero las direcciones sindicales mayoritarias han subordinado los intereses de los trabajadores a una política de pactos sociales con los gobiernos socialdemócratas-verdes (y en el caso del Estado español, con el PP) que ha sido un medio esencial para introducir las políticas neoliberales que eran la base del Euro, "con un rostro humano". Con el cambio de ciclo económico en el 2001-2002, el aumento del paro, de la reestructuración ha minado no solo la capacidad de reacción de los sindicatos bajo las direcciones sindicales actuales mayoritarias, sino la propia base electoral de los gobiernos socialdemócratas-verdes europeos.

Sin embargo, las movilizaciones del movimiento por otra globalización y contra la guerra -que empezó en la UE con las manifestaciones de Praga, Niza, Genova, Barcelona y Bruselas, alcanzó su nivel más alto en Barcelona y Genova y, tras el Foro Social Europeo de Florencia ha sido capaz de sacar a la calle el 15 de febrero a más de cinco millones de europeos a la calle- están creando una nueva correlación de fuerzas y las condiciones para la construcción de una nueva izquierda anticapitalista y alternativa en la UE. Los propios sindicatos mayoritarios se han visto arrastrados y han organizado manifestaciones propias en Niza y Bruselas y han participado en algunas luchas contra los cierres de empresas y por subidas salariales.

Pero el objetivo de las clases dominantes europeas es dar un segundo impulso a las medidas de reestructuración neoliberal, atacando especialmente los servicios públicos, y servir de catalizador para una vuelta al gobierno en la mayoría de los estados miembros de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias. Su verdadero lema no es ¡Más Europa! sino ¡Más Mercado!. Su programa supone una importante división y

contradicciones entre el eje socialdemócrata-verde alemán y francés y la nueva alianza conservadora de Blair-Berlusconi y Aznar.

Pero la socialdemocracia y los verdes, convertidos en la “izquierda de la derecha”, incapaces de movilizar a su base social tradicional, dividida ante sus propias políticas de “neoliberalismo con rostro humano”, parecen paralizadas ante la ofensiva social de la derecha conservadora europea aunque hayan sido capaces de recuperar su iniciativa en la oposición a la guerra contra Iraq de la Administración Bush. Los sindicatos mayoritarios, que ven amenazado hasta el mismo derecho de representación y negociación colectiva que justifica su existencia, se verán ante una dura alternativa y la presión de decenas de miles de trabajadores que tienen el ejemplo del movimiento por la justicia global y los sindicatos y movimientos de parados alternativos. Se abre de nuevo la posibilidad de desarrollar corrientes de izquierdas en los sindicatos mayoritarios pero sobre todo la coordinación directa entre trabajadores de sectores en lucha a nivel europeo.

El marco de la UE es hoy un espacio determinante de los conflictos políticos y sociales en Europa. El 60% de la actual legislación adoptada por los parlamentos nacionales transpone legislación adoptada previamente por los Consejos Europeos, que es el verdadero centro de la gobernanza neoliberal en nuestro continente.

Sin abandonar lo local, lo nacional o lo estatal, la izquierda alternativa tiene que articular su capacidad de intervención en todos estos ámbitos y también en el marco global de la UE, de manera que se complementen y se refuercen. La propia experiencia empírica y algunas primeras iniciativas han dado ya pie a políticas europeas de la izquierda alternativa, como las propias contra-cumbres del movimiento por la justicia global, las protestas de Via Campesina, las manifestaciones sindicales de

Niza, Bruselas, Sevilla o las Euromarchas.

No se trata de ser la “izquierda” del proyecto “europeista”. Sino de construir, en la crítica de la actual UE neoliberal y en la propia experiencia del movimiento, un programa de lucha por otra Europa. Un programa que parta de los valores solidarios, de la justicia y la igualdad, de las aspiraciones democráticas y que enfrente los mismos a las políticas económicas neoliberales, a las manipulaciones políticas que secuestran la representación ciudadana y a los proyectos de las multinacionales y la oligarquía de dotarse de una “Europa potencia”.

Este es el objetivo de las Conferencia Anticapitalistas Europeas, agrupando en un foro de debate y coordinación a un sector significativo de la izquierda alternativa. A través de la acción común vamos clarificando los elementos de un programa alternativo a la Europa del Capital que hoy es la UE.